

Salamanca, Guanajuato, a **23 veintitrés de agosto** 2019 dos mil diecinueve, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-29/2019**, promovido por **XXXXX** por su propio derecho, ha llegado el momento de resolver lo que ha derecho proceda y;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado en la secretaria de acuerdos de este Juzgado Administrativo Municipal el **03 tres de junio de 2019 dos mil diecinueve**, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, compareció a efecto de demandar el acto y autoridad administrativa siguiente:

ACTO ADMNISTRATIVO

*[...] Considero que lo constituye el **oficio número JDP/154/2019 de fecha 16 de mayo de 2019**, el cual contiene una manifestación de “NO FACTIBLE” para el visto bueno de autorización de punto de venta, emitido por el **XXXXX**, Guanajuato, siendo que ya contaba con una autorización de factibilidad previa e incluso con los permisos y vistos buenos de las unidades administrativas municipales correspondientes. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento me fue entregado en copia simple.[...]*

AUTORIDADES DEMANDADAS

a) XXXXXXX Municipal de Salamanca Guanajuato.

Además, el justiciable solicitó a) la nulidad del acto impugnado, b) se declare que al haberse cumplido con la documentación necesaria, si se satisfacen los requerimientos exigidos para que se expida la certificación de factibilidad favorable y que en ésta, no obre ninguna otra observación o circunstancia que se exceda de la realidad que acontece sobre las condiciones del lugar donde se pretende explotar XXXXXX, puesto que ya contaba con una FACTIBILIDAD donde se autorizó la actividad comercial que llevo a cabo en la misma zona y sobre el mismo local comercial. c) la condena a la autoridad a efecto de que la Dirección que resulte competente emita la factibilidad de manera adecuada y favorable.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. En actuación de **06 seis de junio de 2019 dos mil diecinueve**, se admitió a trámite la demanda interpuesta y se ordenó emplazar al XXXXXX, para efectos de que en el término de ley formulara su respectiva contestación de demanda.

Asimismo, se admitieron las pruebas documentales presentadas por el actor, asimismo, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

Además se le negó la suspensión para el efecto de mantener las cosas en el estado que se encuentran hasta en tanto se resuelva el presente asunto. Toda vez que al concederse se causarían perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. De conformidad a lo estipulado en los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por acuerdo de **08 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve**, se tuvo a la autoridad encausada en tiempo y forma por dando contestación a la demanda entablada en su contra, así mismo se le tiene por aportando documental en la que acredita la personalidad con la que comparece al proceso y por autorizando representantes legales.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de alegatos.

CUARTO. Citadas legalmente las partes a la audiencia de alegatos, siendo las **10:00 diez horas con cero minutos de 12 doce de julio de 2019 dos mil dieciocho**, en su desahogo ninguno de las partes acudió ni presento los alegatos por escrito.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. Se encuentra debidamente acreditada la existencia del acto impugnado mediante la copia simple del oficio numero: JDP/210/2019 del 21 de junio de 2019 cuyo valor probatorio se apoya en la manifestación que hizo la autoridad en su contestación de demanda, en cuanto dijo que era cierto que lo había expedido y defendió su legalidad; lo anterior sin que exista en el expediente elemento probatorio en contrario u objeción respecto del documento aportado por el actor.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117 y 119 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento se analizan de oficio o a petición de parte por ser cuestiones de orden público.

Al no hacerse valer por ninguna de las partes una causal de improcedencia del presente proceso y al no haber ninguna causa que estudiar a consideración de esta Juzgadora se considera que **no ha lugar el sobreseimiento en el presente proceso**, ya que no se configuraron las causales de improcedencia contenidas en el numeral 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y tampoco se actualiza lo establecido en el numeral 262 del código de la materia.

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente los conceptos de impugnación expuestos por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada.

Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la

sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

En estricta observancia a los principios que rigen las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en esa guisa se procede a examinar el único concepto de impugnación hecho valer por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual medularmente manifestó; el actor refiere a que el acto que se impugna es ilegal por estar indebidamente fundado y motivado. Pues señala que respecto a la inspección señalada en el oficio se determinó una incidencia alta de la cual tiene desconocimiento a que se refiera dicho termino, pues no refiere como es que se llegó a dicha conclusión y por la cual no se le otorgo la constancia de factibilidad favorable para el hoy actor. Además de que la autoridad fue omisa en precisar las razones particulares y

circunstancias especiales de tiempo, modo y lugar respecto del procedimiento donde concluyo que efectivamente afectaría la armonía o bienestar social, pues no señalo a qué tipo de supuesta actividad delincencial se estaría expuesto el establecimiento.

En estos términos resulta **fundado** el argumento aludido por la parte actora atento a las siguientes consideraciones:

Si bien el oficio número: JDP/154/2019 del 16 de mayo de 2019 no se encuentra fundado ni motivado, pues no existen los argumentos válidos que motiven la inspección que se realizó en el inmueble ubicado en calle XXXXXXX, Pues del acto se puede desprender que la autoridad fue omisa en señalar, los motivos, objeto y el alcance la visita así como los fundamentos legales de la inspección de acuerdo al artículo 208 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.

Lo pretendido por el actor resulta jurídicamente procedente, toda vez que el acto de autoridad emitido por la encausada no se encuentra fundada y motivada, con ello violentando lo dispuesto por el artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, numeral que textualmente a la letra señala:

«ARTÍCULO 137. Son elementos de validez del acto administrativo:

VI. Estar debidamente fundado y motivado; >>

Además, es menester señalar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda autoridad competente al dictar actos debe fundar y motivar la causa legal de su actuación, con la finalidad de brindar seguridad jurídica frente a los particulares, ello con la finalidad de que este último conozca las particularidades y circunstancias bajo las cuales la autoridad

administrativa tomo la determinación asentada en el acto combatido.

Consecuentemente, Por fundamentación debemos entender que es la expresión con debida precisión del precepto legal aplicable al caso concreto, señalando con exactitud los artículos, fracciones, incisos o subincisos y apartados que se emplea para la afectación jurídica de las personas.

Asimismo, por motivación debe entenderse que son los razonamientos inherentes a las circunstancias del hecho, contenidas en el texto del acto, es decir, **establecer de forma pormenorizada las circunstancias especiales, particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad administrativa para la emisión del acto**, esto es, señalar el por qué se ha actualizado la hipótesis normativa consistente en faltas administrativas.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte 2, página 622, Tesis No. VI. 2º .J/31, que a la letra establece:

<<FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.>>

Así, para considerar que se cumple con la formalidad destacada, la autoridad emisora de un acto de autoridad que incida en la esfera de derechos de un gobernado, debe plasmar de manera exacta y clara los dispositivos legales bajo los cuales funde y motive su actuar para atender y responder lo planteado

por el accionante, lo que en la especie no ocurre dado a que la autoridad encausada emite un pronunciamiento sin sustentar legalmente la emisión del acto y determinar que en la zona se encuentra.

A mayor abundamiento, cabe puntualizar que la fundamentación y motivación de los actos administrativos debe contener, como se esclareció supralíneas, los siguientes elementos: a) preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y, c) argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto.

Sirve como fundamento a lo anterior, la Jurisprudencia Común 175082. I.4o.A. J/43. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, Pág. 1531, que establece:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es

suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.”

Por otra parte, con relación al concepto de impugnación en estudio, la autoridad demandada negó que su acto administrativo se encontrara indebidamente fundado y motivado; y detalló de manera novedosa los dispositivos legales bajo los cuales emitió su respuesta respecto de la petición de la parte actora, señalando que es autoridad competente para la elaboración del Resolutivo de Índice Delictivo de la Zona, así como también señalando la motivación de porque el lugar donde se encuentra el inmueble es considerado como no factible para el Giro de XXXXXXX.

Es evidente que los argumentos de defensa esgrimidos por la autoridad demandada son tendientes a perfeccionar su acto administrativo, es decir, en la contestación de la demanda pretende de manera novedosa fundar y motivar el acto combatido, Sin embargo, es en el cuerpo del acto de autoridad, y no en la contestación de demanda, donde debe establecerse la motivación y fundamentación del acto.

Robustecen lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto.¹”

¹ Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 139-144 Tercera Parte, Página: 201. Número de Registro: 237870.

Por lo tanto, este Juzgado Administrativo considera que el acto impugnado que por esta vía se combate carece fundamentación y motivación requeridas, situación que se traduce en un vicio de forma, al no cumplirse con el elemento de validez del acto administrativo contenido en la fracción I del artículo del 137 del Código de Procedimiento y, lo cierto es que por la naturaleza del acto al tratarse de un requisito indispensable para poder obtener una licencia de funcionamiento para establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo XXXXXX, es de decretarse la **NULIDAD PARA EFECTOS** de que la autoridad emita un acto debidamente fundado y motivado.

Pues es evidente que del estudio de las constancias que integran el presente proceso el actor si tiene un permiso de uso de suelo con el giro XXXXXXXX, por lo que se trata de un establecimiento de "ALTO IMPACTO", por tal motivo es que se necesita contar las constancias de factibilidad de las distintas autoridades implicadas y con la autorización del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, al tratarse de un establecimiento de "ALTO IMPACTO" y en atención a la solicitud que realizo el actor en Ventanilla Única, adscrita a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano, para el resolutivo de Índice XXXXX.

Lo anterior, a la luz de la jurisprudencia número 2a./J. 67/98, correspondiente a la Novena Época, con registro 195590, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Página 358, bajo la voz:

«FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido»

En ese sentido, en la presente causa administrativa se configuró la causal de ilegalidad prevista en la fracción II del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establece:

Artículo 302. Se declarará que un acto o resolución es nulo, cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

- II. Omisión de los requisitos formales exigidos en las leyes, inclusive por la ausencia de fundamentación o motivación en su caso;

En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 300, fracción III del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se declara la **NULIDAD** del oficio número: HDP/154/2019 DEL 16 DE MAYO DE 2019, **para los efectos** siguientes:

- Deje insubsistente el acto combatido.
- Emita un nuevo acto en el cual precise los fundamentos y motivos, como el precisar la Inspección que se llevó a cabo en cuanto a su objeto, motivo, autoridad que lo

realizo, día y hora, la cual tomaron en cuenta para considerar el lugar como “NO FACTIBLE” para un establecimiento XXXXXXXX”.

- En la emisión de su acto administrativo se sujete al principio de legalidad contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, es decir, funde su competencia con los dispositivos legales aplicables a la materia que representa dentro de la administración pública centralizada de Salamanca, Guanajuato.

Lo anterior, es así toda vez que este órgano jurisdiccional no tiene la atribución de sustituir a la autoridad administrativa en su facultad decisoria y pronunciarse sobre la solicitud de la actora, dada la violación formal advertida en la emisión del acto controvertido, se emite la presente resolución para los efectos señalados en los párrafos que anteceden.

Sirve como apoyo a lo anterior, resulta la siguiente Tesis Jurisprudencial:

«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a

declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el XXXXX, además de la nulidad del acto impugnado, solicito vía reconocimiento de un derecho lo siguiente:

a) El reconocimiento del derecho para que se declare que al haberse cumplido con la documentación necesaria, si se satisfacen los requerimientos exigidos para que se expida la certificación de factibilidad favorable y que en esta, no obre ninguna otra observación o circunstancia que se exceda de la realidad que acontece sobre las condiciones del lugar donde se pretende explotar la licencia de alcoholes, puesto que ya contaba con una FACTIBILIDAD donde se le autorizó la actividad comercial que llevo a cabo en la misma zona y sobre el mismo local comercial.

Al respecto, el reconocimiento del derecho aludido por el accionante se encuentra supeditado a un nuevo acto de autoridad, por lo tanto, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para asumir facultades propias XXXXXX, Guanajuato dado la naturaleza de la **nulidad para efectos** a que se ha hecho referencia.

En consecuencia, **no ha lugar a decretar el reconocimiento del derecho pretendido por el actor**, esta determinación se fundamenta en el Criterio sostenido por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que establece:

“PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Decretada la nulidad del acto reclamado por violaciones de forma y condenando a la autoridad a emitir un nuevo acto purgando esos vicios, es incuestionable que las acciones de reconocimiento de un derecho y el pago de daños y perjuicios se encuentran condicionados a la emisión del nuevo acto, puesto que la demandada debe en primera instancia respetar la garantía de audiencia del actor y posteriormente fundar y motivar debidamente su nuevo acto; en consecuencia, no ha lugar a adoptar ninguna medida adecuada para el pleno restablecimiento de las acciones que nos ocupan.(Exp. 6.04/04. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2004. Actor: *****)

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de quince días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el proceso administrativo **JAM-29/2019**.

SEGUNDO. Se decreta la **NULIDAD PARA EFECTOS** en los términos de lo manifestado en los CONSIDERANDO QUINTO.

TERCERO. No ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** pretendido por la parte actora de conformidad al CONSIDERANDO SEXTO.

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Nuñez Diosdado**, Juez Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Leslie Haydeé Valadez Dávalos**, quien da fe.